



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: JORGE ANDRÉS CANO ISAZA
Demandado: ZEUS PETROLEUM S.A
Radicado: 05001 31 05 016 2020 00002 01
Decisión: A-070

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de ambas partes, en contra del auto proferido por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín el día 20 de febrero de 2023 mediante el cual se negó el decreto de la prueba testimonial solicitada.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante auto escrito, aprobado previamente por los integrantes de la Sala.

A N T E C E D E N T E S :

En el proceso de la referencia, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto del 20 de febrero de 2023, dispuso negar el decreto de la prueba testimonial solicitada por ambas partes, por el hecho de no haber dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 212 del Código General del Proceso, esto es, no se

señala el objeto de dicha prueba ni se indica cuáles son los hechos que con las declaraciones allí relacionadas se pretenden probar.

Inconforme con lo decidido, el apoderado del demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, indicando que en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, no se establecen requisitos para llevar a cabo los testimonios o cualquier medio de prueba. Manifiesta que muchos de los hechos objeto de debate han sido probados y aceptados al punto que el demandante reconoce que recibía propinas lo que era una práctica común y habitual no solo de él sino de todos, pero hay hechos fundamentales que van mucho más allá como las normas y el reglamento que se trató de aplicar a los trabajadores a destiempo con el único fin de dar por terminados sus contratos laborales y así tener una justificación válida para ello.

Lo propio hizo la apoderada de la empresa demandada señalando que el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social establece que son admisibles todos los medios de prueba y de manera expresa se indicaron las razones por las cuales se estaban solicitando los testimonios, advirtiendo que lo sería por las circunstancias de tiempo, modo y lugar del contrato de trabajo y su terminación. La prueba es idónea, conducente y pertinente y cumple con las exigencias del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social e incluso las del Código General del Proceso.

Indica que se está limitando el alcance de la prueba testimonial en cuanto al tema de determinar si era costumbre o no recibir propinas. Para determinar si fue justa la terminación del contrato, es importante tener claro si existía la prohibición expresa del trabajador de recibir dichos beneficios y determinar si a pesar de dicha prohibición el trabajador simplemente toma la decisión de incumplir dicha norma.

El Juzgado repuso parcialmente la decisión en el sentido de limitar el decreto y la práctica de la prueba testimonial a un solo testimonio y a determinar si era costumbre o no recibir propinas, concediendo el recurso de apelación que de manera subsidiaria se había presentado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En el término del traslado para alegar concedido a las partes, el apoderado de la demandada se pronunció solicitando se revoque el auto por medio del cual se negó la prueba por considerarla una decisión que vulnera su derecho de contradicción y debido proceso.

C O N S I D E R A C I O N E S:

Según el recurso de apelación presentado por ambas partes, la inconformidad común que se plantea tiene que ver con la decisión del Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín de negar el decreto de la prueba testimonial por el hecho de que ninguna de ellas señaló expresamente el objeto de dicha prueba, ni indicó cuáles son los hechos que con las declaraciones relacionadas en el acápite correspondiente se pretenden probar.

Al respecto es importante advertir, que, en principio, a pesar del interés en abstracto que de las pruebas tenga cada una de las partes, su decreto y práctica no siempre ha de ser automática, por cuanto previamente el juez, como supremo director del proceso, está facultado para analizar si aquellos medios probatorios, como cualquiera otro, no son superfluos y por el contrario, pueden ser conducentes, pertinentes y útiles.

Ahora bien. El artículo 212 del Código General del Proceso citado como fundamento de la decisión, establece que *“Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar*

donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba."

Esta norma conduciría, en efecto, a un estudio adicional de la solicitud de la prueba que realice cada una de las partes, verificando si además de su conducencia, pertinencia y utilidad, y la plena identificación de cada uno de ellos con su dirección y domicilio, se incluya el objeto de tales declaraciones, o lo que es lo mismo, sobre cuáles hechos se les podría preguntar a los testigos.

Sin embargo, el Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, regulación propia para los asuntos de ésta especialidad, no tiene consagrada una limitación de esa naturaleza. El artículo 50 tiene establecido que *"Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley..."*, señalando en su artículo 53, como requisito de forma, simplemente que: *"El juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito."*

De esta manera, la procedencia de una prueba está determinada por la posibilidad de que su práctica esté admitida legalmente (conducencia), que tenga capacidad de lograr el efecto que se espera (pertinencia) y que aporte al proceso (utilidad), con la finalidad, se reitera, de llevar certeza al juez de los hechos que se describen en la acción o en su contestación y su objeto es soportar las pretensiones o las excepciones, sin que como requisito formal para su decreto se exija una enunciación concreta de los hechos que van a ser objeto de esos testimonios, como sí lo regula expresamente el Código General.

Y ha sido doctrina aceptada que los ritos procesales, sin desconocer su necesidad en el mundo del derecho, tienen por propósito la materialización de los derechos subjetivos, que es principio elevado a rango constitucional incluso, como lo dicta el artículo 228 de la Carta Política:

“Art. 228. – La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes, Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca a ley **y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.** Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado, Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo” (Negrillas propias)

Canon desarrollado por el artículo 11 del propio CGP, conforme al cual,

“Interpretación de normas procesales.

Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente Código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias”

De manera que no tiene sentido que el juez rechace la práctica de los testimonios de las partes por lo que considera un incumplimiento del deber de estas en manifestar cuáles hechos pretenden probar, mutilando de esta forma la posibilidad de la búsqueda de la verdad material con miras a proveer un fallo en derecho. Máxime que, en materia laboral, están de por medio los derechos sociales del trabajador, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

En el caso concreto, se evidencia que, en el acápite de pruebas del escrito de la demanda, se relacionan los nombres, cédula de ciudadanía y lugar de residencia de 3 testigos, RACHAR FERNEY MESA ALVARES, ROBINSON AUGUSTO RAVE AGUDELO y LUÍS MIGUEL MORALES, sin que un análisis previo permita su descarte por motivos

de impertinencia, inutilidad o inconducencia, por lo que debe procederse con su decreto y práctica.

En el caso de la empresa demandada, la situación es mucho más clara y en ella, de todas maneras, se cumpliría con esa exigencia consagrada en el Código General, pues además de solicitarse el testimonio de GABRIEL JAIME CORREA VELÁSQUEZ, WILFER SALDARRIAGA, ANGÉLICA MONTIEL y LUÍS FELIPE ZAPATA ORTEGA, a continuación, se indica que se llaman a declarar sobre los hechos de la demanda y su contestación y *"... en especial sobre las condiciones de tiempo modo y lugar del contrato de trabajo y su terminación"*.

Consecuente con lo anterior, son de recibo los argumentos expuestos por los apoderados de ambas partes, razón por la cual el auto del 20 de febrero de 2023 será REVOCADO en cuanto negó el decreto de la prueba testimonial solicitada; en consecuencia, se decretarán los testimonios de RACHAR FERNEY MESA ALVARES, ROBINSON AUGUSTO RAVE AGUDELO y LUÍS MIGUEL MORALES solicitados por la parte demandante y los de GABRIEL JAIME CORREA VELÁSQUEZ, WILFER SALDARRIAGA, ANGÉLICA MONTIEL y LUÍS FELIPE ZAPATA ORTEGA solicitados por la demandada, ordenando al Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín que disponga las condiciones para su práctica, sin las limitaciones impuestas en su decisión.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín el día 20 de febrero de 2023 en cuanto **negó el**

decreto de la prueba testimonial solicitada por ambas partes; en su lugar, se decretan los testimonios de RACHAR FERNEY MESA ALVARES, ROBINSON AUGUSTO RAVE AGUDELO y LUÍS MIGUEL MORALES solicitados por la parte demandante y los de GABRIEL JAIME CORREA VELÁSQUEZ, WILFER SALDARRIAGA, ANGÉLICA MONTIEL y LUÍS FELIPE ZAPATA ORTEGA solicitados por la demandada, ordenando al Juzgado que disponga las condiciones para su práctica, sin las limitaciones impuestas en su decisión.

Sin costas en esta instancia.

Se notifica lo resuelto por ESTADOS y se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 051
del 24 de marzo de 2023

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e555017073867573d36a128fe80c85e075a6f8e30e097e79f9578450502ea8cf**

Documento generado en 23/03/2023 02:48:26 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>